

el norte del Perú»; así como se recurre al curandero (o al demonio o al «apu» poderoso) para obtener riqueza, se recurre a él también muy frecuentemente por asuntos amorosos: conseguir o retener a la pareja. Antes de Colón, tales hechizos existían tanto en Europa como en América. Luego de un largo rodeo por temas más generales (la novela pastoril, las historias incaicas de amoríos, la demonización del curanderismo autóctono por los españoles, la condenación bíblica de la mujer, las tradiciones mochicas, la distinción entre «compactos» o «maleros» y curanderos por gracia divina, y las diferencias entre curanderos y espiritistas norperuanos), los autores entran en tema con el «enwayanche», también conocido como amarre, jalada, enredo o ajuste, tendiendo a «sujetar» la voluntad de la persona amada, el hechizo de amor más solicitado; proporcionan abundantísimos datos empíricos sobre su subclasificación y su tratamiento ritual, amén de su caso opuesto: el desamarre; es interesante observar que, según los mismos curanderos entrevistados, el enwayanche no puede crear amor donde no lo hay, y por ello su efecto es de duración limitada.

Sin posibilidad de entrar en una evaluación de cada uno de los trabajos citados, puede decirse, no obstante, que se trata en su totali-

dad de las contribuciones más actuales sobre los temas respectivos, contándose sus autores entre los expertos más respetados. No es nueva, en cambio, ni la intervención de excelentes andinistas japoneses, ni la magna labor difusora de ambas instituciones editoriales.

Hatun willakuy. Versión abreviada del Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, Perú, Lima: Comisión de Entrega de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, 2004, 477 pp.

En 1980 el grupo Sendero Luminoso (SL) desató una guerra contra el Estado peruano que duró 20 años; dejó un saldo de más de 69 mil muertos o desaparecidos (muchas más víctimas que las de la guerra por la independencia y la guerra con Chile), además de infinitas pérdidas materiales. Este libro es el resumen de la narración de este tristísimo período. Lleva título en quechua («gran relato») como homenaje póstumo, ya que tres de cada cuatro víctimas fueron campesinos quechua-hablantes. Ello se debe a que SL es la fracción maoísta del Partido Comunista Peruano, y se sabe que Mao apoyó heterodoxamente toda su campaña militar en el campesi-

nado en lugar de basarse en la clase obrera. La táctica fundamental de SL consistió en ocupar territorios campesinos, asesinar a las autoridades, sustituirlas por gente de sus zonas ocupadas, adoctrinar a los campesinos, obligarles a proporcionar manutención y soldados (incluyendo muchos menores de edad) y retirarse cuando el Ejército, regular atacaba. El Ejército reprimía brutalmente con asesinatos y amenazas la adhesión verdadera o forzada de los campesinos a SL; cuando se retiraba el Ejército y volvía SL, éste reprimía con la misma brutalidad a los verdaderos o supuestamente arrepentidos que habían dado apoyo a las tropas regulares. El 54% de las víctimas fatales fueron causadas por SL, fenómeno inédito en las guerrillas latinoamericanas, donde ningún grupo insurgente produjo más del 5% de dichas víctimas.

Las Fuerzas Armadas, responsables de aproximadamente el 30% de las víctimas fatales, escapó finalmente de este laberinto de violencia cambiando de táctica e intentando ganarse a la población de las zonas de conflicto en lugar de exterminarla sin miramientos. La comisión editora distribuye ecuanímente su crítica a las «fuerzas del orden»; la policía sale bastante bien parada, entre otras cosas porque, si bien se le quitó protagonismo subordinán-

dola durante un largo tiempo a las Fuerzas Armadas, fue su servicio de inteligencia el que condujo a la captura de casi todos los principales líderes de SL. En cambio salen muy mal parados los gobiernos civiles. El primero de ellos (Belaúnde Terry, presidente en 1963-68, depuesto por los militares de Velasco Alvarado y reelegido para el período de 1980-85) primero restó importancia a la insurgencia y luego claudicó, encargando la conducción de la guerra a los militares, con la consiguiente desaparición total de control democrático en los infinitos atentados contra los derechos humanos. El siguiente (del aprista Alan García, 1985-90) prestó en un primer momento más atención a las denuncias de violación de los derechos humanos y a las posibilidades de negociar la paz, pero luego retomó el viejo cauce. El tercer gobierno (Alberto Fujimori, 1990-2000) introdujo numerosos cambios en la legislación antiterrorista para hacerla más efectiva pero menos democrática; con el autogolpe propulsado por las Fuerzas Armadas (5/4/1992) tuvo finalmente la posibilidad de otorgar a éstas el máximo nivel de impunidad, amnistiando incluso en 1995 a los agentes estatales acusados de violar derechos humanos. Su éxito en capturar a los principales cabecillas de SL no derivó de esta orientación sino,

como vimos, de la acelerada formación y perfeccionamiento de los servicios de inteligencia, especialmente los policiales.

Los indígenas quechahablantes no fueron los únicos campesinos pobres fuertemente perjudicados. Los asháninkas, indígenas de la selva central, contaban con una población de entre 50 y 55 mil personas; de ellos murieron unos 6 mil durante el conflicto, otros 10 mil fueron desplazados forzosamente, y alrededor de 5 mil fueron, en algún momento, cautivos de SL. El asesinato de uno de sus jefes máximos por el MRTA (Movimiento Revolucionario Túpac Amaru, activo desde 1984 y responsable del 1,5% de las víctimas fatales del país) los llevó a formar un ejército propio.

El presente informe es un modelo de claridad expositiva; cada capítulo enfoca el conflicto desde una perspectiva. El 2 estudia por separado las organizaciones subversivas, SL y MRTA, analizando tanto su historia y líderes como su ideología. El 3 aborda el gobierno de Belaúnde y el de García. El 4, la actuación de los cuerpos policiales (responsables del 6,6% de las víctimas mortales) y las Fuerzas Armadas (responsable del 28,73%). El 5, los gobiernos de Fujimori, sus múltiples formas de corrupción y su nefasto asesor Vladimiro Montesinos, sin olvi-

dar la sucia influencia norteamericana y las alianzas tácticas con el narcotráfico. El 6 versa sobre los factores que hicieron posible el conflicto. El 7, sobre las secuelas del mismo: el denso clima de miedo y desconfianza, los traumas psíquicos (en los niños soldados, en los testigos del asesinato de seres queridos y en las personas violadas o torturadas), los sentimientos de culpa (reprocharse la impotencia para evitar muertes y desapariciones), la desintegración de innumerables familias, la destrucción de comunidades indígenas enteras, el vacío de poder en otras por la eliminación de sus líderes, el desplazamiento de miles de miembros de una misma etnia, etc. Un grupo aparte y fundamental de estas secuelas son las de carácter económico; en todo momento, el informe toma en consideración los aspectos económicos del conflicto, tanto en sus consecuencias como en sus causas y en la descripción de cada gobierno implicado. Lo mismo dígame de las diferencias regionales, sin olvidar el importante caso de Lima. El capítulo 8 es una lista de propuestas tendientes a fomentar la reconciliación nacional y evitar una reiteración del conflicto.

El Informe Final, excelentemente editado en este resumen, puede consultarse completo en www.cverdad@org.pe